



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2017 00136 00

Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2017 00136 00**.

Accionante: Mario Amezquita Espitia.

Accionado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES.

Clase: Ordinario - nulidad y restablecimiento del derecho.

El Despacho procede a pronunciarse sobre los siguientes aspectos: (i) la solicitud de adición, aclaración o modificación de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020; (ii) el trámite de los recursos de apelación interpuestos contra la aludida providencia. La solicitud como el recurso, los presenta el apoderado de la parte actora, y además, apeló la contraparte: la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para decidir se **CONSIDERA:**

1. De la solicitud de adición, aclaración y modificación. El memorialista señala falencias en la parte motiva y resolutive de la sentencia de 29 de octubre de 2020. Dice el libelista que la Resolución 811 de 20 diciembre no es del 2020 sino del 2010, y pide reemplazar la palabra pública por privada, utilizada en la parte motiva. Por otra parte, sostiene que se omitió pronunciarse sobre la subrogación de la pensión.

En principio, *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”*, según el artículo 285 del CGP. No obstante, esta norma, y el siguiente artículo 286, permiten aclarar o corregir errores en las palabras, o en la utilización de las mismas dentro de la providencia. En este caso, es evidente que en el ordinal segundo de la parte resolutive se erró en el año de la Resolución de la referencia, por ello, se concederá su corrección. Sin embargo, el Despacho considera que no hace necesario realizar la misma corrección respecto de la parte motiva, porque ello no influye en la decisión ni en la consideración a que hace alusión.

Tampoco se concederá la aclaración de la palabra “pública”, utilizada a folio 13 de las consideraciones de la sentencia, y que el actor estima debe sustituirse por “privada”, pues las palabras consignadas se deben entender dentro del contexto de



la providencia y el contenido del expediente. Vale decir, el lector podrá despejar cualquier duda sobre los alcances de aquella palabra, al observar la secuencia de los argumentos de la providencia y las pruebas allí referenciadas.

En punto de la mencionada omisión de fondo, el Despacho se orientará por lo dispuesto en el artículo 287 del CGP, según el cual la sentencia se adicionará *“cuando omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”*. La omisión que se aduce, consiste en que faltó decidir lo concerniente a la subrogación de la pensión.

Tal omisión se sustenta en que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, dejó de pagarle el monto de la pensión que le pagaba la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, con ocasión de la expedición de los actos acusados. Ello, a criterio del libelista, implicó que la Universidad se subrogó en la pensión. Bajo tal entendimiento, considera que se debió ordenar la devolución de los valores retenidos por la citada Universidad, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa.

El Despacho considera que la omisión no se configura, pues el propio libelista transcribe el aparte de la providencia, en el cual el Juzgado expresaba porque no se pronunciaba sobre la subrogación. En palabras sucintas, en la cita que hace el libelista se indicó que la subrogación no se definió con la Resolución 631 de 2015. En efecto, al ir al resuelve de la precitada Resolución se requirió al pensionado para que *“indique a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a COLPENSIONES cuál de las dos prestaciones se le seguirá cancelando por resultarle más favorable”*. Ello se expresó antes del inicio de la cita que hace el libelista. De ahí, que se diera por hecho que, con la actuación acusada, no se definió la subrogación, sino que se postergó a lo que decidiera el afectado.

Adicionalmente, las pruebas no demostraban que la citada Universidad se hubiese subrogado en la pensión de COLPENSIONES. Es más, el Despacho consideró que COLPENSIONES continuó con el pago, y por ello, se le ordenó que hiciera la reliquidación, a raíz de la irregularidad allí anotada. Vemos, igualmente, que el libelista no controvierte que COLPENSIONES le pagaba la pensión, al igual que la Universidad. Por si lo anterior no fuese suficiente, la solicitada adición (ordenar la



devolución de dineros) no se propuso como pretensión de la demanda.

Por manera, que sólo se corregirá el error en el año de la Resolución 811, que no es de 2020 como se anotó, sino del 2010 como lo hace ver el libelista. Se negará en lo demás, la solicitud arriba enunciada.

Finalmente, el actor solicita que en caso de no prosperar la aludida solicitud se tenga como sustentación de recurso de apelación. El Despacho concederá esta solicitud, en vista que no prosperó la petición de adición de la sentencia.

2. Trámite del recurso de apelación. El Juzgado concedió los recursos de apelación interpuestos por las partes, a través de auto de 2 de marzo de 2021. Sin embargo, al llegar la alzada ante el Superior, se ordenó la devolución del expediente, para que se diera aplicación al artículo 192 del CPACA, sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, esto es, *“citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso”*.

El Despacho obedecerá y cumplirá lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 31 de mayo de 2021, y por consiguiente, se dejará sin efecto el auto que concedió los recursos de apelación, para en su lugar, fijar fecha y hora para llevar a cabo la aludida audiencia.

Adicionalmente, en la parte motiva de la providencia de la citada Corporación, se señaló que *“se requiere al despacho para que se anexen las constancias de las fechas de radicación de los memoriales, tanto de los recursos de apelación, como de la solicitud de aclaración”*. El cumplimiento del requerimiento se realizará a través de la Secretaría del Juzgado.

Por lo expuesto, se **RESUELVE:**

PRIMERO. CORREGIR el ordinal segundo de la sentencia de 29 de octubre de 2020, en el sentido que la Resolución 811 de 20 diciembre no es de 2020 sino del 2010, conforme a lo aquí anotado.



SEGUNDO. NEGAR la corrección, aclaración y adición de la sentencia de 29 de octubre de 2020, en los demás aspectos solicitados, conforme a lo expuesto en esta providencia.

TERCERO. TENER como recurso de apelación, el escrito de aclaración y adición de la sentencia de 29 de octubre de 2020 que presentó la parte actora, según lo anotado en precedencia.

CUARTO. OBEDECER Y CUMPLIR lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 31 de mayo de 2021.

QUINTO. DEJAR sin efecto el auto de 2 de marzo de 2021, que concedió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 29 de octubre de 2020, como consecuencia de lo dispuesto por el Superior, de acuerdo a lo antes consignado.

SEXTO. FIJAR el miércoles 20 de octubre de 2021, a las 8:30 a.m., como día, fecha y hora para celebrar la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 192 del CPACA, sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, en cumplimiento de lo ordenado por el Superior. Advertir a las partes que la asistencia es obligatoria, pues en caso de no asistir se declarará desierto el recurso de apelación.

SÉPTIMO. Por Secretaría, dese cumplimiento al requerimiento del Superior, y por consiguiente, expídanse las constancias enunciadas en el auto de 31 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo antes expuesto.

Notifíquese y cúmplase

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ